



El presidente Zapatero estrechaba las manos de los máximos dirigentes de CiU, Artur Mas y Josep Antoni Duran i Lleida, para escenificar el acuerdo sobre el 'Estatut'. / EFE

Tiranía idiomática

Para demostrar que el nacionalismo no representa, en modo alguno, a la totalidad de la sociedad catalana, diversas asociaciones culturales de la región mediterránea, de Aragón, Valencia y Baleares suscribieron ayer un manifiesto contra la imposición del idioma catalán, que consideran está llegando «a unos límites insospechados». La declaración, apoyada por más de 150 colectivos, denuncia «la grave situación provocada por las ansias imperialistas de Cataluña» y critica el uso de la lengua local, «que se impone y es considerada como propia de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares», así como el sistema educativo de estas regiones, en las que «los padres no pueden elegir libremente el idioma en el que estudian sus hijos».

El presidente de la Academia Balear, Juan Vanrell, uno de los promotores de la iniciativa, denunció que las instituciones donde se lleva a cabo «un mayor adoctrinamiento» es en los colegios y las universidades, lugares en los que «se excluye cualquier otra lengua».

Zapatero «respeta» las presiones de la prensa catalana al Constitucional

El presidente del Gobierno insiste en apoyar la reforma y no cuestiona el editorial conjunto de 12 diarios, que amenazan con un levantamiento social si no se avala la integridad del 'Estatut'

• El PP ve «intolerables» las advertencias a los magistrados y acusa al líder socialista de haber engañado a los ciudadanos al aprobar una ley que atenta contra la Carta Magna.

AGENCIAS / BARCELONA-MADRID - En Cataluña, como sucedía en el País Vasco antes de que PP y PSOE rescataran el sentido común, ya no hay derecha ni izquierda. Allí a nadie parece importarle que el ideario conservador de CiU vaya de la mano con la extrema izquierda representada por ERC, siempre y cuando los esfuerzos comunes se encaminen a presionar al Estado para lograr nuevos privilegios. De ahí que, ante la amenaza de una sentencia del Tribunal Constitucional que podría desmoronar las veleidades soberanistas del Estatut, tirios y troyanos hayan hecho pifia en torno al victimismo, de modo que las quejas de quienes dicen dar más de lo que reciben no llegan solo desde el previsible nacionalismo insolidario, sino que también provienen de un socialismo que se ha olvidado de ser obrero y español para apuntarse al carro del rentable chantaje al Estado con la amenaza de romper amarras si los pedigüeños castellanos, andaluces y extremeños no pasan por el aro de la superioridad de Cataluña.

Hasta tal punto se ha impuesto el egoísmo a los principios, que ayer mismo una docena de medios de comunicación escritos, de todas las tendencias, se pusieron de acuerdo para echar una nueva soga al cuello del Constitucional mediante la publicación de un incendiario editorial en defensa del supuesto derecho de Cataluña a disfrutar de privilegios superiores a los del resto del Estado.

Precedidos por la complicidad del presidente Zapatero, al que el ordenamiento jurídico también parece importarle bastante menos que los dolores de cabeza que conllevaría una posible sentencia restrictiva, los rotativos, unidos bajo el título *La dignidad de Catalunya*, amenazaron al Tribunal Constitucional para que «respete» el Estatut «por ser una ley orgánica aprobada con el visto bueno del

Parlament y las Cortes, además de haber sido respaldada en referéndum y de contar con la sanción del Rey». «Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia», reza el texto antes de cuestionar la legitimidad judicial.

En lo que supone una presión tan burda que bien podría definirse

como chantaje, los rotativos sostienen que el dilema real que se presenta «es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de ésta», puesto que no solo están en juego «éste o aquél artículo», sino «la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición».

ATAQUE A «LA DIGNIDAD». Por si las veladas referencias a la violencia no fueran bastante, los diarios tienen incluso la osadía de irrogarse la representación del pueblo catalán para llamar a una especie de rebelión civil. «Que nadie yerre el diagnóstico, no estamos ante una sociedad débil, postada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad», resume el enervado discurso.

Tal cúmulo de intransigencias fueron recibidas con una sonrisa cómplice por parte de Zapatero, que es el primer interesado en que se mantenga el texto. El presidente se limitó a comentar que había leído «con respeto y mucho interés» el editorial, pero declinó analizar su contenido alegando que respeta la libertad de expresión.

Similar fue la actitud del líder del PP, Mariano Rajoy: «No voy a decir nada; mi posición es conocida: es el respeto a la ley y a las reglas del juego, y punto. A partir de ahí, cada uno puede opinar lo que quiera, hasta ahí podíamos llegar».

Menos reservada se mostró la número dos del partido conservador, María Dolores Cospedal, que denunció como «absolutamente intolerable» las presiones que se están ejerciendo sobre el Constitucional. La manchega subrayó, además, que el «culpable» de que los ciudadanos catalanes «se puedan sentir engañados» es Zapatero, puesto que fue él quien, de modo «frívolo e irresponsable», aseguró que «se aprobaría cualquier cosa» que saliera del Parlament.

LAS DECLARACIONES

►APM (ASOC. JUDICIAL)

«Se trata de una presión grosera e intolerable»

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que el texto publicado ayer por los rotativos catalanes que insta al Tribunal Constitucional (TC) a respetar el texto del Estatuto de Cataluña constituye «una presión intolerable» que intenta «influir groseramente» en los magistrados para «mover sus voluntades en una determinada dirección». La iniciativa «no es pertinente, aceptable, democrática ni adecuada a las exigencias de un Estado de Derecho», señala el colectivo, que coincidió en su juicio con el Foro Judicial Independiente (FJI).

►J. MONTILLA ('PRESIDENTE')

«Me siento del todo identificado con la carta»

El presidente de la Generalitat, José Montilla, dijo sentirse «identificado» con las presiones de los medios regionales al Constitucional y expresó su agradecimiento a los 12 rotativos que acogieron la iniciativa, así como al resto de colectivos y entidades que se adherieron. En un comunicado, el líder regional afirmó que ha recibido con satisfacción la publicación del texto, y recordó que se trata de una «iniciativa histórica, tanto por su simbolismo, como porque refleja perfectamente la amplia unidad que hay en la sociedad catalana en la defensa del Estatut».

►ROSA DÍEZ (UPYD)

«No defienden la dignidad, sino su financiación»

La líder de UPyD, Rosa Díez, tachó de «vergonzoso» el editorial conjunto en defensa del Estatut, un texto en el que, a su juicio, los diarios no defienden la dignidad de Cataluña «sino los anuncios que (los partidos e instituciones catalanas) les ponen en sus periódicos». Díez explicó que el artículo, además de «una presión» a las instituciones democráticas, supone una «manipulación» de la realidad porque, según insistió los medios de comunicación solo buscan salvaguardar la financiación que les proporciona el Gobierno liderado por el socialista Montilla.